Las consecuencias políticas de la crisis del modelo capitalista de 2008

La humanidad ha pasado por reincidentes crisis del capitalismo desde su surgimiento, durante la decadencia de la Edad Media, y el ascenso de la burguesía que pasó a dominar los medios de producción en disfavor de los artesanos, impulsada por la expansión ultramarina y lo que se llamó renacimiento comercial en los Siglos XV y XVI. La más reciente tuvo inicio en 2001, con la explosión de la burbuja especulativa gestada en el núcleo del sistema Nasdaq, y su ápice ocurrió en 2008, teniendo como centro la crisis en el mercado inmobiliario de Estados Unidos y la quiebra del banco Lehman Brothers. Ésta significó un duro golpe para las agencias de clasificación de riesgos, una de las cuales, pocos días antes de la quiebra del banco, le concedió una nota de las más elevadas. Quedó claro que al evaluar el desempeño de bancos, empresas y países, las agencias lo hacen según los intereses de banqueros y rentistas, manipuladores del sistema financiero internacional.

En Brasil, los efectos de la crisis del 2008 no se sintieron de inmediato, pues los gobiernos del Partido de los Trabajadores inyectaron recursos en la economía, invirtieron en infraestructura, financiaron sectores productivos utilizando préstamos contratados con tasas de intereses subsidiadas junto al BNDES – Banco Nacional de Desarrollo Social, aumentaron el poder de compra de la población de los estratos más bajos e incluyeron un significativo contingente de excluidos en el universo del consumo básico, utilizando la valorización del sueldo mínimo y la creación de programas sociales y líneas de crédito para mantener fuerte la demanda.

La precarización del mundo del trabajo provocada por los capitalistas

A rigor, desde Marx y Engels hay pocas novedades en los mecanismos utilizados por los capitalistas para profundizar la explotación laboral. Emparedados por las serias crisis recientes del sistema capitalista, cuyos orígenes están ancladas en la insostenible e indecente financerización de la economía, en la falsa creación de riqueza, derivada de la extinción del padrón oro por los norteamericanos al final de la Segunda Guerra Mundial y por la sed de ganancias de los inventores de derivativos y demás formas de riqueza documental, la burguesía ahora alza mano de expresivas parcelas de los ocupantes de cargos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las naciones, consolidados como sus aliados a lo largo de décadas, para degradar aun más las condiciones de trabajo de los individuos. Estas instituciones han promovido y apoyado golpes, condenando ciudadanos sin que haya crimen y pruebas sobre las acusaciones, absolviendo o dejando de arrestar otros criminosos (sobretodo políticos corruptos aliados a banqueros y rentistas), han quitado derechos sociales y laborales, utilizando las policías militares para reprimir violentamente cualesquiera manifestaciones por derechos sociales, además de utilizar el Ejército para realizar intervenciones en la seguridad, tan ineficaces cuanto agresivas hacia los pobres y excluidos del sistema de mercado.

Desde éste punto de vista no hay novedades en la línea de frente. La disputa permanece entre el poder Judicial, sus banqueros, rentistas, políticos que los representan y trabajadores.

El golpe en Brasil

Hubo dos objetivos centrales por los cuales se dio el golpe contra la Presidenta Dilma Rousseff. En la macropolítica, la intención fue separar a Brasil de las políticas desarrolladas por los BRICS, a ejemplo del Banco de Desarrollo, de los acuerdos políticos y comerciales del grupo y reducir a polvo la importancia política y la credibilidad del país ante la comunidad internacional, conquistadas por no portarse más como un simple satélite de los yanques. Para alcanzar esto, los golpistas brasileros contaron con el apoyo y soporte de las "élites" brasileras y de los Estados Unidos. El segundo tiene sus raíces en la necesidad de devolver a la exclusión y a la miseria una parcela significativa de los trabajadores brasileros que de ahí salieron gracias a la política de aumentos reales del sueldo mínimo, de la implantación de programas de distribución de renta, financiamiento de cursos universitarios en universidades privadas para estudiantes pobres, extensión de derechos básicos como jubilación, vacaciones y jornada laboral regular para empleados domésticos, facilitando la profundización de la explotación de la fuerza de trabajo de la población a precios viles.

Además de las parcelas más reaccionarias de las instituciones ya mencionadas, los medios oligopólicos escritos y televisivos, en este caso con especial destaque para la Red Globo de televisión, desempeñaron un rol fundamental al manipular informaciones, proteger sus aliados políticos corruptos y difundir falsedades para perjudicar sus oponentes ante el gran público.

El rol de las reformas para subyugar los trabajadores de Brasil

La mas lesiva de las reformas fue la reforma laboral, por establecer que prevalece lo acordado entre empleados y patrones, aun existiendo ley previendo lo contrario, que van desde la posibilidad de elevar el número de horas trabajadas, reducir el tiempo en las pausas para alimentación y reposo, jornadas intermitentes, incluso solamente en los fines de semana, en negro y sin cualquiera de los derechos básicos, como sueldo mínimo, vacaciones, seguridad social, aguinaldo (decimotercero sueldo) y seguros de salud. Debe destacarse otra decisión lesiva a los trabajadores: la extinción del impuesto sindical, que consistía en el pago de un día de sueldo al sindicato que representa la categoría, bandera defendida por movimientos sindicales más combativos, pero implementada en momentos de extrema fragilidad de las entidades, que vino de la reforma laboral, situación para la cual ellas no se prepararon.

En el centro de la misma reforma, gran parte del poder Legislativo atacó y debilitó duramente la justicia laboral, la cual cuida solamente de acciones derivadas de las disputas entre patrones y empleados. El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, uno de los articuladores del golpe contra Dilma Rousseff y defensor de las reformas, dijo que la justicia laboral impedía el desarrollo del país. Incluso un ministro del Tribunal Superior del Trabajo dijo algo parecido, bajo el más completo silencio de las

demás instancias del Poder Judicial, con escasas excepciones. Otra decisión tomada en claro intento de inhibir las acciones laborales impetradas por los trabajadores fue la de que si el juez encargado entiende que la demanda es indebida, puede obligar el demandante a indemnizar en un monto significativo al empleador.

Mientras tanto, el número de desempleados en Brasil llega a 14 millones, sin contar los subempleados que no tienen vínculo laboral con nadie y ninguna protección como derecho a jubilación, vacaciones, aguinaldo, seguro contra desempleo o auxilio alimentación, cuya actividad es vender los más variados productos en las calles o aceras. Hoy el número de estos pregoneros ("camelôs") en actividad en Brasil llega a cientos de miles de personas. Estos son apenas algunos de los perversos resultados de una reforma laboral elaborada para, dada la crisis del capitalismo, aumentar en mucho la explotación de la plusvalía agregada por los trabajadores durante el proceso productivo, como ya decía el viejo Marx.

Según la Folha de São Paulo del 28 de abril de 2018, periódico conservador cuya sede se encuentra en el estado de São Paulo, desde la aprobación de la reforma laboral se extinguieron más de un millón de puestos de trabajo formales, que constituyen la garantía de derechos sociales elementales.

La reforma previdenciaria y la destrucción de SUS – Sistema Único de Salud Pública

Para saciar su sed de ganancias, al costo de la expoliación de los trabajadores, los banqueros, rentistas y la turba formada por sus sicarios aliados, compuesta en su mayoría por concejales, alcaldes, diputados estaduales, diputados federales, gobernadores y senadores de los partidos más reaccionarios de Brasil, teniendo al frente el golpista Michel Temer, los cuales usurparon el sillón presidencial, también dirigieron su codicia contra los derechos de jubilación y de salud pública, cuya exploración desean entregar a los banqueros y operadores de salud privados a través de reformas, de asfixia financiera del sistema de salud pública y de no ejecución de las deudas de banqueros, gobiernos de los tres niveles y empresas con la seguridad social. El resultado es que en dos años el país retrocedió a lo que era hace veinte años en lo que se refiere a derechos sociales y calidad de vida de la población.

La represión a líderes de movimientos sociales y parlamentares progresistas

La concejala Marielle Franco, del partido Socialismo y Libertad (PSOL), y el chófer Anderson Gomes, quien conducía su vehículo, fueron asesinados el 14/03/2018 con disparos de metralleta en la ciudad de Rio de Janeiro, muy probablemente por la milicia de derecha que actúa en la zona oeste de la ciudad, en un barrio llamado Curicica, región de Jacarepaguá, cuyo jefe es el ex policía militar Orlando Oliveira de Araújo, quien cumple pena por asesinato e intento de homicidio y que, según informaciones aun controvertidas, estaría negociando una delación premiada después que un testigo le apuntó como involucrado en este crimen. Esta misma persona apuntó como ordenador del crimen el concejal Marcelo Siciliano, del Partido Humanista de Solidariedad (PHS), sobre quien pesan acusaciones de ser cómplice de la milicia de Orlando para realizar campaña

electoral en el área dominada e impedir otros candidatos de buscar votos allí. Según el testigo, entre los autores del crimen estaría un policía militar activo y otro jubilado.

La sospecha es de que la concejala fue muerta en función de su trabajo comunitario y de las denuncias que realizaba contra la violencia policial hacia los habitantes de comunidades carentes. Para que se tenga una idea de la gravedad de la situación, en los últimos cuatro meses hubo más de 120 tiroteos entre policías y narcotraficantes apenas en una comunidad. Los policías de la Policía Militar de Rio de Janeiro intimidan, roban, trafican, secuestran y ejercen una violencia inhumana contra los pobres de cualquier color, los negros, las mujeres y excluídos.

Además de este caso que tuvo repercusión internacional, ha crecido significativamente el número de asesinatos de activistas sociales partícipes de la lucha por reforma agraria, como el MST – Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, el MTST – Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, y los defensores de los derechos humanos.

La señal verde política para los asesinatos de Marielle Franco y Anderson Gomes fue dada por el General Walter Braga Neto, interventor en el área de seguridad en el estado de Rio de Janeiro, designado por el ilegítimo ocupante del sillón presidencial Michel Temer para intentar levantar su nivel de aprobación, que hoy no supera los 4%, al afirmar que los soldados bajo su comando no podrían resolver el problema de la seguridad en el estado si estuvieran sujetos, más adelante, a ser blanco de investigaciones como la que fue promovida por la Comisión de la Verdad, cuyo resultado fue comprobar más de un centenar de asesinatos cometidos por los militares durante los años de dictadura en Brasil (1964-1985), ahora corroborada en toda su miseria por la publicación de mensajes intercambiados entre informantes de CIA, quienes vivían en Brasil durante los años de la dictadura apoyada por el gobierno norteamericano y financiada por rentistas, banqueros, industriales y la seudo élite brasilera.

Ésta debe ser contextualizada. En Brasil, la existencia de algo que se entiende como élite es totalmente cuestionable. En cualquier lugar del mundo donde exista una élite decente, ella planifica en largo plazo buscando alcanzar niveles de soberanía y desarrollo adecuados con el objetivo de propiciar calidad de vida para la población como un todo. Las instituciones donde se abrigan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial actúan con exención, lisura y decencia y cumplen rigurosamente las leyes.

En Brasil, hace ya algún tiempo, no ha sido así. Decisiones judiciales son tomadas de acuerdo con los intereses y el origen de aquellos que se creen dueños del poder, o sea, las “élites locales” a que me refiero, y con el origen del paciente. Si el paciente es de la misma camarilla del juzgador, puede ser beneficiado con puesto político que le proporcione foro privilegiado. Si no es, no habrá manera, aunque uno y otro sean acusados de los mismos delitos.

En algunos casos, para condenar reos que también no pertenecen a la camarilla de los juzgadores, no habrá necesidad de la exigencia de pruebas. Al fin y al cabo, ¿para qué? Bastan convicciones, ilaciones y una u otra proyección de power point. En caso de

recurso a segunda instancia, convicciones e ilaciones serán suficientes, dispensándose los power points.

Las relaciones de los poderes Ejecutivo y de larga parcela del Legislativo con los empresarios nacionales, según dijo en entrevista el ex diputado por el Partido Progresista (PP) Pedro Corrêa, siempre fueran basadas en sobrecostos de obras, corrupción y pago de coimas a lo largo de los últimos 40 años en los que actuó como político. ¿Dónde estaban los Tribunales de Cuentas de los Estados y de la Unión, que nada vieron y que aprobaron las cuentas de presidentes, gobernadores y alcaldes, con escasas excepciones, durante todo éste tiempo? ¿Dónde estaba el celo de ministros que extinguieron el proceso que prohibía el financiamiento de campañas electorales por empresarios para políticos? ¿Acaso no desconfiaban del cuadro descripto por Pedro Corrê?

Incluso la velocidad de los procesos judiciales depende de quien sea el cliente. Cuando los objetos son “helicocas” o aviones transportando la misma carga, se necesita mucha calma. Sin embargos, para otros la celeridad puede y debe ser alucinante.

¿Qué esperar de esta élite? En mi opinión, apenas más de lo mismo que ya ha hecho: doblarse ante intereses extranjeros, vender el patrimonio nacional a precio de banana y hasta entregar partes del territorio nacional.

Estos pocos ejemplos de los impactos directos en la vida de las personas ocurren en un país en lo que apenas cinco billonarios detienen riqueza equivalente a la de la mitad más pobre de la población del País. Los datos son parte del relatorio “Recompensen el trabajo, no la riqueza”, de la organización no gubernamental (ONG) británica Oxfam, quien participa del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, del cual me permito mencionar otros pocos datos.

La lista tiene en el tope a Jorge Paulo Lemann, 77 años, socio del fundo 3G Capital, seguido por Joseph Safra, de 78 años, del Banco Safra. El tercer y el cuarto colocados también son de 3G Capital: Marcel Herrmann Telles, 67 años, y Carlos Alberto Sicupira, 69 años. El quinto es Eduardo Saverin, de Facebook. Cuando el listado fue elaborado, aun no se tenía la información de que el dueño de AMBEV ya aparecía en posición bastante confortable en este club.

Brasil ganó 12 billonarios en 2017, pasando de 31 para 43. “Esto significa que hay más personas concentrando riqueza. Aun no encontramos un camino para enfrentar esta desigualdad”, afirmó Katia Maia, directora ejecutiva de Oxfam Brasil.

El patrimonio de los billonarios brasileros alcanzó R$ 549 mil millones el año pasado, un crecimiento de 13% hacia 2016. Por otro lado, los 50% más pobres tuvieron su participación en la renta nacional reducida de 2,7% para 2%. Un brasilero que percibe un sueldo mínimo necesita trabajar 19 años para cobrar lo mismo que recibe en un mes una persona encuadrada en el 0,1% más rico.

De toda la riqueza generada en el mundo en 2017, un 82% quedó concentrada en las manos de los que se encuentran entre el 1% más rico, mientras la mitad más pobre –

correspondiente a 3,7 mil millones de personas – se quedó sin nada. El documento destaca que hubo un aumento histórico en el número de billonarios el año pasado: uno más cada dos días. Según Oxfam, éste aumento sería suficiente para terminar con la pobreza extrema en el planeta siete veces. Actualmente hay 2.043 billonarios en el mundo. La concentración de riqueza también refleja la disparidad de género, pues de cada 10 billonarios, nueve son hombres.

El informe pide que los ricos paguen una “cuota justa” de impuestos y tributos y que sean aumentados los gastos públicos con educación y salud. “Oxfam estima que un impuesto global de 1,5% sobre la riqueza de los billonarios podría cubrir los costos de mantener todos los niños en la escuela”.